



PODER POPULAR

Por una verdadera democracia: NO en la Consulta Popular.

Editorial

“La democracia burguesa usa la ingenuidad y el miedo del pueblo para imponerse “legitimante” por los caudales de votos y, cuando no juegan a la democracia, nos reprimen con bombas y balas, el Estado asesina a sangre fría al pueblo desarmado y así se imponen los intereses de la minoría sobre la mayoría.”



Ingenuamente hay quienes defienden elecciones y votos diciendo que defienden la democracia, pero no pueden estar más equivocados. ¿Desde cuándo el simple acto de votar significa que hay democracia? ¿Es que todos podemos o debemos opinar o decidir sobre las cosas, aunque no sepamos o no entendamos sobre lo que estamos decidiendo? Pues no, la verdad es que ni los votos son sinónimo de democracia, ni todos deben decidir sobre lo que no entienden. Sin embargo, esto último es la regla básica de la manipulación de la democracia burguesa mediante la cual sustentan sus gobiernos dictatoriales, aunque parezca una contradicción, es la verdad.

Hoy nos enfrentamos a un nuevo intento de fraude electoral, político e institucional. El gobierno va a “consultar” a 13.9 millones de ecuatorianos sobre temas que no entienden. Les preguntan sobre la necesidad de cambiar una Constitución que no ha leído ni siquiera el 3% de la población y por eso, mediante el miedo y la manipulación, generan la campaña diciendo que es la Constitución es la que impide juzgar delincuentes; la que no permite luchar contra el narco tráfico y cualquier otra barbaridad. Y como son ellos quienes manejan los medios de comunicación y tienen de sobra la plata para comprar conciencias, opinadores y pagar la publicidad en redes sociales, se imponen en la retórica mediática con argumentos falsos.

Vamos a ver cada caso:



Referéndum, pregunta A: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras?

El argumento oficial sostiene que las bases militares extranjeras servirían para combatir el narcotráfico. Sin embargo, la historia nacional demuestra exactamente lo contrario: nunca una base extranjera ha contribuido realmente a erradicar ese problema. Lo que sí es cierto es que, cada vez que un país permite la instalación de bases militares foráneas, lo hace con propósitos militares, es decir, para prepararse para la guerra. En este caso, las bases que se pretende instalar serían de Estados Unidos, cuyo verdadero interés es fortalecer su capacidad de reacción geoestratégica frente a China, Rusia y otras potencias. No es casual que busquen hacerlo en las islas Galápagos, el punto más cercano a China desde este lado del Pacífico: un enclave de enorme valor geopolítico. Pero, además, ceder territorio nacional para uso militar extranjero significa algo todavía más grave: involucrar al Ecuador en conflictos armados ajenos, renunciar a la soberanía y asumir sin disimulo el papel de patio trasero del imperialismo.

Referéndum, pregunta B: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas?

El argumento es que el pueblo no debe pagar a los partidos y que deben auto financiarse. Se olvidan de decir que, lo que paga el Estado es propaganda electoral para que todos los partidos tengan la misma oportunidad de pautar en medios y no se impongan las chequeras en las campañas, esto permite que se participe en igualdad de condiciones y eso fortalece la democracia representativa y, además, los fondos de partidos y movimientos, que por cierto según la actual ley no los reciben todos y eso si debería modificarse en la Asamblea Nacional, son fondos sujetos a control por las autoridades y se refieren a gastos en educación, formación y otros similares con la idea que no sean cáscaras de huevo, sino que sean de verdad espacios de representación de una parte de la población.

Referéndum pregunta C: ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas?

El gobierno propone reducir el número de asambleístas de 151 a 73, pero la verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a aceptar que el presidente de turno tenga mayoría absoluta y que la Asamblea pierda su capacidad de control político sobre el poder ejecutivo? Mientras menos asambleístas se elijan, mayor será la posibilidad de que el presidente arrastre una mayoría automática, anulando la fiscalización y eliminando la representación de las minorías políticas y sociales. Una Asamblea reducida significa menos voces, menos diversidad y más poder concentrado en un solo bloque político. Por el contrario, un mayor número de representantes garantiza un Parlamento más plural, donde los distintos sectores del pueblo puedan expresarse y vigilar el ejercicio del poder. Reducir el número de asambleístas no es una medida de austeridad ni de eficiencia: es un paso hacia un régimen hiperpresidencialista, donde la democracia se sustituye por la obediencia y el país se somete al capricho de un solo gobernante. En otras palabras, pretenden cambiar la República por una monarquía sin corona.

Consulta Popular, casillero D: ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente?

Esta es la pregunta del millón, la que de verdad le interesa a la oligarquía; nos mienten con cualquier argumento de miedo, sin embargo, cuando uno les pregunta: ¿cuál es el artículo de la constitución que dice o permite eso que dicen que quieren cambiar? La respuesta es: "no se..." entonces, la verdad es que nuestra Constitución establece no solo derechos, sino un marco normativo que no permite que se roben los recursos naturales, privaticen los servicios públicos, se lleven el dinero del país, hagan feriados bancarios, regalen el petróleo a las trasnacionales etc., etc., etc. La verdadera intención es cambiar la Constitución para que todo eso se permita, para quitarles derechos al pueblo y darle mas derechos al capital facilitando sus negocios en contra de la soberanía del país y despojando al pueblo de la poca Patria que nos queda.

Así entonces nos queda claro: No en la consulta en defensa del pueblo y para empezar a construir una verdadera democracia.

En momentos como estos es que queda claro quiénes son los aliados de la burguesía y del capital extranjero; y no se trata solo de una campaña sobre una consulta popular, se trata de entender la historia y nuestro rol de guía de pueblo y conductores de la lucha más profunda y radical que implica también desenmascarar a quienes pretenden imponer en cualquier espacio las banderas de la despolitización y la despartidización que no son sino estrategias del mismo sistema para seguirle apostando a la desideologización. Con ese mismo discurso o con el del “diálogo” hay quienes niegan la lucha de clases y piensan que los intereses del pueblo pueden mediar con los de la oligarquía. ¡Que ingenuos! o más bien que forma más sutil de ser cómplices con su rol de organizaciones funcionales que se ponen de alfombra del sistema, del Estado o del gobierno.

Nosotros hablamos de unidad, pero unidad real, en donde se valore la historia y se respete la independencia de las organizaciones, no bajamos nuestras banderas, nuestra lucha es por el socialismo y en contra del sistema de manera integral, por eso es que valoramos como positivos los resultados del paro nacional y las movilizaciones de octubre y nos seguimos convocando a la movilización permanente pues todo golpe a la legitimidad del Estado burgués y sus lacayos es un triunfo del pueblo. Nuestra lucha es en contra el sistema de explotación que somete al pueblo, nuestra lucha es por la revolución.

En esa inmensa lucha de liberación del pueblo hoy tenemos una batalla, hay que ganar la consulta popular y en ese proceso seguir consolidando la unidad de los sectores revolucionarios y populares.



Noboa verdugo de la Salud Pública en Ecuador

El año 2025 se ha inscrito en la historia de Ecuador como el año más sangriento, por la cifra récord de muertes violentas registradas; que han mantenido un crecimiento sostenido durante los gobiernos abiertamente neoliberales de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. Lo cual no es coincidencia, sino la consecuencia de la profundización de las desigualdades e inequidades sociales, que no tienen respuestas de un Estado que está al servicio de los ricos y poderosos.

La deficiencia en las actividades preventivas ya se ha manifestado con brotes de enfermedades que deberían estar bajo control, como ha pasado con la fiebre amarilla y la tosferina. Las bajas coberturas de diversos biológicos en menores de cinco años, constituye una bomba de tiempo para nuevos brotes de enfermedades letales.

En los hospitales no hay medicamentos ni alimentos para los pacientes hospitalizados. El personal de salud no cuenta con las condiciones mínimas necesarias para ofrecer una atención de calidad. No solo está en juego la integridad física y psicológica de pacientes sino también la integridad profesional de quienes se ven forzados a intentar resolver problemas sanitarios sin los recursos necesarios.

En medio de todo esto y sin la más mínima comprensión del funcionamiento de un sistema de salud, el gobierno de Noboa creó un Comité de Salud que no ha servido para absolutamente nada bueno, diluyendo la función de rectoría de la autoridad sanitaria nacional asignada al Ministerio de Salud Pública. Pero, para no perder la costumbre, Noboa vuelve a plantear que la provisión de servicios médicos a los afiliados del IESS pase al Ministerio de Salud Pública, precisamente en el momento de su más aguda crisis de financiamiento y provisión de servicios.

Se va a terminar el año y el presupuesto del Estado para el sector de la salud no se ha utilizado ni la mitad. Dejan más de 2000 mil millones de dólares sin gastar para comprar ambulancias, ecógrafos, rayos x, tomógrafos, y más equipos que se necesitan en hospitales y centros de salud. Y no contento con eso, miles de trabajadores de la salud han sido despedidos sin la mínima justificación, reduciendo aún más la capacidad de los establecimientos públicos para responder a las demandas de la población. Pero Noboa dice que lo que se necesita es un buen sistema de agendamiento.



Las calles como escuela política del pueblo:

Balance político del paro nacional de octubre, logros, aprendizajes y retos hacia la necesidad de articular un bloque popular.

Octubre se ha convertido en sinónimo de resistencia en Ecuador: 2019, 2021 y ahora 2025, convocó a fuertes movilizaciones nacionales, en la lucha de cara a las políticas neoliberales implementadas por los Gobiernos de turno; durante este último, el retiro del subsidio al diésel anunciado por el Noboa fue la gota que derramó el vaso.

Cabe mencionar que, previo a la paralización de octubre, el 16 de septiembre, como respuesta a la entrega de la concesión minera a la empresa Dundee Precious Metals para explotar Quimsacocha, más de cien mil personas marcharon en defensa del agua y la vida en Cuenca. Esta movilización fue posible, gracias a la confluencia de amplios sectores de la población, que, aunque no necesariamente se posicionaron contra el Gobierno, se movieron por la defensa de un bien común. Como resultado, se logró parar las pretensiones del gobierno (al menos por el momento).

Una semana después, parte del sector indígena, convocó a paro nacional que tuvo lugar a finales de septiembre y durante más de la mitad del mes de octubre. El paro como tal (paralización de sectores económicos y estratégicos como el transporte) abarcó fundamentalmente a la Provincia de Imbabura, y Carchi y Pichincha, presentando además acciones de resistencia (marchas, plantones, eventos culturales) en otras ciudades del país.

En un contexto social en el cual la inseguridad se ha agudizado, y se gobierna a punta de estados de excepción, naturalizando el miedo y justificando actitudes dictatoriales so pretexto de combatir el crimen; el Gobierno de Noboa, de manera intransigente y represiva anunció que no daría pie al diálogo, tildando de terroristas y violentos a los que protestan, intentando enlazarlos con el crimen organizado; desconociendo así, el descontento generalizado con su gobierno y las políticas neoliberales implementadas.

El 22 de octubre, luego de 30 días de paro, se anuncia por parte de la CONAIE el fin del paro nacional que dejó como resultado decenas de heridos y criminalizados, tres comuneros asesinados por los policías y militares, allanamientos a viviendas de campesinos; sin ningún acuerdo, imponiéndose el miedo y la represión al diálogo, pero también, con un gobierno deslegitimado con una notoria baja en su credibilidad Y que se ha visto forzado a cumplir con las ofertas de compensación y ha respondido con medidas populistas de bonos o cualquier otra artimaña para lavarse la cara.

Como balance general, más allá de la consignas iniciales movilizadoras, el paro nos dejó grandes resultados en el campo popular como la conformación de espacios comunes articuladores de sectores organizados y no organizados, aprendizajes colectivos en las formas de protesta, y solidaridad; lo que permite tener mayor cohesión y capacidad de acción de cara a la resistencia frente al llamado a Consulta Popular.

La resistencia en la calle, sin duda se constituye como una vía de formación política en tanto se configura como espacio de aprendizaje y acción colectiva, y conecta el descontento popular por las condiciones de vida, debido a las medidas económicas implementadas por el gobierno, a la posibilidad de organización frente a un modelo neoliberal antepone las políticas del FMI y de los intereses de las grandes transnacionales y mineras a las del pueblo.



Aunque el Gobierno ha cooptado los medios, la narrativa de los espacios de resistencia está logrando calar en más sectores de la población, que contrastan el nivel de movilización de la fuerza policial y militar para reprimir al pueblo que protesta vs la capacidad de acción del gobierno para precautelar la seguridad de la población, esto permite mostrar el tipo de política al que nos enfrentamos y abre una ventana a la posibilidad de articulación de narrativas comunes: la falta de inversión en salud y educación vs el gasto en municiones y armas, el alza de impuestos sin resultados claros.

Sin duda, el momento nos convoca a seguir fortalecimiento la acción política colectiva, desde la calle, pero también desde nuevas pedagogías políticas que nos permitan movilizar los descontentos en intereses comunes y constituírnos en un gran bloque popular que nos permita reconocernos como actores diversos, golpeando juntos.



Como diría Orwell, el reto es “mantenernos humanos”, más aún en un país como el nuestro, en donde la narrativa del odio y el miedo es parte de la estrategia de Gobierno para anular a quienes pensamos distinto. Por tanto, es fundamental construir una posición superadora del antagonico: oficialismo vs correísmo. Esto obliga a actuar en unidad con los sectores organizados comunitarios y de base, recuperando y reconstruyendo confianzas mutuas a partir de acciones colectivas organizadas, aprendiendo mutuamente y reconociendo que, aunque con diferencias tácticas, la lucha de calle no puede ser solo espontánea, sino que requiere estrategia política, organización y un norte común que nos movilice: Ahora el gran reto es defender la vida, la naturaleza, y nuestros derechos mínimos en la Constitución.



El terrorismo como narrativa: la guerra semiótica del poder"

La narrativa del "terrorismo" y la "delincuencia" se ha convertido en un arma ideológica fundamental para los grupos de poder en Ecuador. Los grandes medios de comunicación, funcionando como voceros de estos intereses, construyen un relato que distorsiona la realidad. Lejos de ser neutrales, reproducen la visión de la clase dominante. Su objetivo es claro: asociar la protesta social con la violencia, y la militancia con la delincuencia. Esta operación busca ocultar las causas profundas del conflicto social, presentándolo como un simple problema de "seguridad" para justificar así la represión estatal contra los movimientos populares y la clase trabajadora.



En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa, actúa como representante de estos intereses económicos y ha intensificado este discurso del miedo para imponer una ofensiva contra los sectores populares bajo la etiqueta de "mano dura". La declaración del "conflicto armado interno" en enero de 2024 funciona como un estado de excepción permanente que revela la naturaleza autoritaria del proyecto de la oligarquía.

Si bien la violencia de los grupos delictivos es real, no podemos analizarla de manera superficial. Estos grupos son consecuencia de un sistema capitalista que genera exclusión y desigualdad, estando vinculados a circuitos económicos globales. Sin embargo, el Estado aprovecha esta problemática para, en alianza con intereses extranjeros, consolidar un régimen que protege los privilegios de unos pocos y reprime cualquier cuestionamiento al orden establecido. Durante el Paro Nacional, la invocación del "Tren de Aragua" sirvió precisamente para criminalizar a dirigentes sociales y estudiantes, materializándose en casos como la persecución de los "12 de Otavalo" o de la presidenta de la FEUE y la Coordinadora Nacional de Estudiantes, Nohelia Ochoa.

La protesta social debe entenderse como la expresión política de un pueblo que resiste. No es un simple derecho abstracto, sino la herramienta concreta de quienes han sido marginados por el sistema. En la democracia actual, los canales formales de participación suelen ser una farsa que mantiene el dominio de los poderosos. Por esto, la protesta surge como medio de organización popular para confrontar un gobierno que impone políticas neoliberales.

Las movilizaciones masivas en Ecuador y Latinoamérica son expresión de la profunda crisis que vive el sistema. Revelan la contradicción fundamental entre una economía que produce riqueza para pocos y mayorías que ven empeorar sus condiciones de vida. El sistema democrático electoral muestra su incapacidad para representar las demandas de una población cada vez más empobrecida. La protesta, por tanto, se convierte en un acto de construcción de poder popular y de confrontación directa con quienes detentan el poder.



Cuando la protesta ocupa el espacio público, la calle, que pertenece al pueblo y afecta la circulación (es decir, el flujo de mercancías y trabajadores), choca directamente con los intereses económicos establecidos. La pregunta sobre qué derecho debe prevalecer se revela, en el fondo, como una cuestión de poder. La noción de "bienestar común"

Cuando la protesta ocupa el espacio público, la calle, que pertenece al pueblo y afecta la circulación (es decir, el flujo de mercancías y trabajadores), choca directamente con los intereses económicos establecidos. La pregunta sobre qué derecho debe prevalecer se revela, en el fondo, como una cuestión de poder. La noción de "bienestar común" que defienden los sectores privilegiados es, en realidad, la protección de sus intereses particulares. Los manifestantes no son simples "infractores de la ley", sino luchadores sociales que son reprimidos por desafiar un orden que garantiza la dominación de una minoría.

Es fundamental que mantengamos la movilización y la capacidad de propuesta, para romper con la lógica del miedo que el gobierno intenta imponer. Frente a este relato que busca paralizarnos, nuestra respuesta debe ser la esperanza y la alegría colectivas, especialmente en este momento crucial de campaña por el NO en la consulta popular. Nuestra participación activa es el antídoto contra el temor y la mejor herramienta para defender nuestros derechos.



En definitiva, el Estado funciona como un instrumento al servicio de los grupos económicos dominantes. El control de las instituciones por parte de élites políticas y económicas no es una falla del sistema, sino la expresión de su funcionamiento natural. La guerra comunicacional que busca estigmatizar la protesta social como "terrorismo" revela el verdadero rostro de una clase dominante en crisis: recurre a la violencia represiva para proteger sus privilegios y mantener un sistema de explotación. En este contexto, defender el derecho a la protesta significa defender el derecho fundamental del pueblo trabajador a resistir frente a la opresión. El desafío actual es desarticular este andamiaje ideológico (del miedo) mientras construimos, desde la unidad popular, la plataforma de lucha que nos permitirá confrontar y derrotar este proyecto de gobierno.

"Racismo estructural y colonialidad del poder: la otra cara del neoliberalismo"

Violencia, Poder y Estado: la organización política como respuesta.

La coyuntura política en nuestro país exige que las organizaciones políticas, sobre todo las revolucionarias, sepan leer la fluctuación y el balance de las fuerzas políticas para entender y responder al "cómo" salir de la crisis a la que nos ha llevado una facción de la oligarquía gobernante. El despliegue militar alrededor de la contención de la movilización en Imbabura resultó ser un ejercicio de "manual" realizado por los aparatos represivos, con orientación brindada por el Comando Sur y la inteligencia militar israelí. La movilización de 12.000 tropas por despliegue terrestre y aéreo, el cercamiento de poblaciones y territorios, el control del acceso a recursos (como internet) y la virulencia de la confrontación urbana inauguran en Ecuador una nueva etapa del control político-militar de las clases dominantes sobre el pueblo, como antesala del quiebre institucional que se avecina.

El Estado, comprendido desde el marxismo, no debe dejar de ser entendido como una relación social que expresa, en un nivel, la lucha de clases y entre facciones por el control del poder de administración y dirección del gobierno. El Estado capitalista es flexible en sus formas político-formales; de manera "normal", se presenta como una república democrático-burguesa, con instituciones y "pactos sociales" fundacionales que le permiten funcionar en una dinámica de "repartición y administración" del poder por medio de partidos políticos que interpelan los intereses de varias facciones (sin dejar de ser intereses de las clases dominantes), así como por medio de un Estado de derecho y la "constitucionalización" de las normas de vida.

Esta realidad implica que las instituciones democráticas representativas facilitan la circulación orgánica y la reorganización de la hegemonía porque ofrecen un espacio para los conflictos fraccionarios. De este modo, las instituciones democráticas inhiben rupturas importantes en la cohesión social y en el sistema de dominación de clase política. (Jessop, 2011).



Este pacto democrático en nuestro país, en el cual la hegemonía por consenso ha sido desde 2008 la norma cotidiana, ha supuesto (en el contexto de nuestra historia) una rareza que, como resultado de la crisis orgánica del periodo 1997-2006, significó un momento de reorganización de las facciones oligárquicas en torno a un Estado más amplio, garantista y relativamente de "bienestar", que permitió al campo popular conseguir conquistas sociales acumuladas por décadas. La lucha por el poder y la implantación de un nuevo modelo de país (a través de la construcción hegemónica de la dirección y dominación política) ha generado en este momento signos de una nueva crisis política, en la cual la hegemonía por la violencia se torna la nueva normalidad. Autores como Bob Jessop (2011), siguiendo el análisis de Gramsci y Poulantzas, mencionan:

Si las crisis políticas e ideológicas no pueden resolverse mediante el juego normal y democrático de las fuerzas de clase, las instituciones democráticas deben ser suspendidas o eliminadas y las crisis resueltas mediante una "guerra de maniobra" abierta que ignora las sutilezas constitucionales.

Lo que vemos en nuestra coyuntura es justamente el proceso de quiebre institucional que la fortalecida facción oligárquico-burguesa, encabezada por la familia Noboa, quiere imponer al Ecuador. El llamado a la Constituyente, por más que en apariencia se muestre como un ejercicio democrático, no es más que la superación de un modelo democrático-burgués que incomoda a dichos sectores. Para ello, y como resultado de la correlación de fuerzas internacionales, han decidido que dicho tránsito será ejecutado pese a cualquier resistencia democrática o popular.



El paro nacional de 30 días, además de ser un ejercicio militar, demostró que el Estado capitalista (como relación social de clase) no tiene reparo en pasar de su momento de "consenso democrático" (elecciones hace pocos meses) a un momento de represión directa. Tampoco debe quedar duda de que dicha violencia estatal, como norma general, jamás será usada contra los demás sectores de las clases dominantes en su variante de violencia militar (con excepción de la hoguera bárbara como excepción histórica); las facciones no dominantes de la burguesía entre las que están los sectores políticos del autodenominado "progresismo", como máximo, afrontan la persecución judicial y mediática como parte del nuevo equilibrio de poder necesario para consolidar la nueva hegemonía.



La crisis, que aún no lo es, pero puede devenir en "orgánica", vinculada al desenlace de la política ecuatoriana en el futuro cercano, debe entenderse no como un proceso ya a priori de fortalecimiento del nuevo bloque hegemónico, sino más bien como el momento de mayor debilidad del campo político. En este, la falta de dirección y conducción política, en medio de la lucha encarnizada por la toma del poder (en todas sus dimensiones), puede abrir las puertas para que una organización política, con capacidad orgánica y política, pueda marcar la salida a la crisis. En este contexto, el Partido debe convertirse en esa organización, no como una prerrogativa divina o unción histórica, sino como resultado del proceso de acción en la política nacional a través de la activación en todos los frentes determinados y con la claridad de que debemos dar dirección y conducción a los sectores que así lo requieren.

Fascismo global y ofensiva imperialista: América Latina en disputa.

En la actual fase del capitalismo global, marcada por la crisis estructural del sistema y la intensificación de las contradicciones entre capital y trabajo, asistimos a la emergencia de una nueva forma de fascismo adaptada a los tiempos del neoliberalismo digital. En América Latina, esta tendencia se manifiesta con nitidez en los gobiernos de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador: expresiones locales de una ofensiva imperialista que busca reconfigurar el continente bajo el signo de la reacción, la represión y el despojo.



Lenin advertía que “el imperialismo es la fase superior del capitalismo”, una etapa en la que los monopolios y el capital financiero dominan la vida económica y política de las naciones. Hoy, esa dominación se expresa no solo mediante los bancos y las corporaciones transnacionales, sino también a través del control ideológico que ejercen los grandes medios de comunicación y las plataformas digitales. La alianza entre gobiernos autoritarios y corporaciones mediáticas constituye un nuevo aparato de hegemonía burguesa, que produce consenso reaccionario y persigue toda voz disidente bajo el discurso del “orden”, la “seguridad” y la “eficiencia”.

Milei, con su fundamentalismo de mercado, encarna el intento del capital financiero por destruir las conquistas históricas del movimiento obrero argentino, apelando a una retórica "anticasta" que encubre la entrega del país a los intereses del FMI y las corporaciones estadounidenses. Bukele, convertido en símbolo del "éxito" neoliberal con mano dura, representa la militarización de la política y la subordinación total del Estado al capital tecnológico y a los inversionistas extranjeros. Noboa, en Ecuador, combina la represión, la criminalización de la protesta y la manipulación mediática para sostener un proyecto oligárquico disfrazado de modernización.

Este nuevo fascismo regional no surge del vacío: es la respuesta del imperialismo ante el avance de las luchas populares y los proyectos soberanos que, en distintos momentos, desafiaron su dominio. Su objetivo es "disciplinar" a los pueblos, destruir la organización social y reinstalar la lógica de la dependencia.



Como señalaba Marx, "las ideas dominantes de una época son siempre las ideas de la clase dominante". De ahí la urgencia de construir una contrahegemonía socialista que desenmascare la propaganda reaccionaria, articule la resistencia de la clase trabajadora y reimpulse el internacionalismo revolucionario. América Latina sigue siendo un campo de disputa: entre la barbarie imperialista y la emancipación de los pueblos.

Racismo estructural y colonialidad del poder:

La otra cara del Neoliberalismo.

El neoliberalismo, en tanto racionalidad política del capital, no es únicamente un régimen económico; es una forma de subjetivación. Es decir, una dispositivo que produce jerarquías, deseos, miedos y formas de vida. En este sentido, su eficacia no depende solo de la economía sino del modo en que logra naturalizar las relaciones de dominación a través de la cultura, la moral y la piel. Detrás del discurso de la "libertad de mercado" y del "mérito individual" se encuentra un orden racial y colonial que sostiene la desigualdad estructural, legitimando la explotación como destino, la pobreza como culpa y la exclusión como consecuencia natural de una supuesta incapacidad cultural.

Como lo advierte Aníbal Quijano, la colonialidad del poder constituye la matriz que articula el capitalismo mundial moderno. No se trata de una mera herencia del pasado colonial, sino de una lógica persistente que ordena el mundo según jerarquías raciales, epistémicas y económicas. En el caso latinoamericano, y en Ecuador, esta colonialidad se expresa en la reproducción cotidiana de un imaginario que asocia el valor humano con la blanquitud, el saber con Occidente, la autoridad con el capital y el atraso con los pueblos indígenas y afrodescendientes.



El neoliberalismo en Ecuador no se impuso solo mediante políticas económicas; lo hizo también mediante una gramática cultural. Bajo la apariencia de modernización y eficiencia, se reinstauró una forma renovada de colonialismo interno: la subordinación de las mayorías populares a un modelo de desarrollo ajeno a sus modos de vida y de organización social. La consigna de “emprender o morir” encubre, en realidad, la violencia estructural de un sistema que convierte la precariedad en mérito y el privilegio en competencia.

Žižek ha mostrado cómo la ideología contemporánea opera precisamente en ese registro: no a través de la represión de la conciencia, sino del cinismo. “Sabemos muy bien lo que hacemos, pero aun así lo hacemos”, dice Žižek. Sabemos que el mercado no garantiza igualdad, pero seguimos creyendo que “trabajando duro” podremos ascender. Sabemos que el racismo existe, pero lo relegamos al ámbito del “prejuicio individual”, negando su función estructural. En este desplazamiento, el neoliberalismo convierte la dominación en una cuestión de actitud, no de estructura; de mérito, no de clase.



Desde una perspectiva marxista, lo que ocurre es que el racismo se articula con la lucha de clases como uno de sus dispositivos ideológicos fundamentales. Marx advertía que la división del proletariado era la condición para que la burguesía mantuviera su hegemonía: la fractura racial impedía la unidad de clase. En Ecuador, algo semejante ocurre cuando la élite construye al indígena, al montubio o al afrodescendiente como “el otro atrasado” que debe ser modernizado y, en consecuencia, dominado.

Bolívar Echeverría insistió en que el capitalismo latinoamericano no puede entenderse sin reconocer el modo en que la modernidad se realiza en clave barroca, es decir, en una tensión constante entre la forma capitalista y las resistencias civilizatorias que provienen de los modos de vida no plenamente subsumidos al valor. En Ecuador, estas resistencias se encarnan en los pueblos que aún sostienen economías comunitarias, territoriales y solidarias, pero que el neoliberalismo busca subordinar bajo la lógica extractiva y financiera.

El racismo, en este contexto, no es solo un prejuicio social sino un mecanismo económico. Es la forma ideológica que permite justificar la apropiación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo. Se racializa a lxs campesinxs para despojarlos de la tierra; se racializa a lxs trabajadorxs para pagarles menos; se racializa a lxs migrantes para precarizarlos. De este modo, la economía política del racismo se articula con la estructura de clases: quienes nacen “de piel oscura” son destinados, en la práctica, a ocupar los lugares más bajos de la cadena productiva, mientras que la blanquitud, real o aspiracional, opera como un capital simbólico que abre puertas en el mercado laboral, educativo y político.

No se trata, por tanto, de dos sistemas paralelos, uno racial y otro económico, sino de un mismo orden estructurado por la colonialidad del poder. Como señala Quijano, la raza fue el primer modo de clasificación social en el capitalismo moderno. Antes que la clase, fue la idea de raza la que permitió legitimar la explotación. Y esa lógica sigue viva, aunque ahora se disfraza de meritocracia.

En el Ecuador contemporáneo, el discurso gubernamental de la eficiencia, la inversión extranjera y la “seguridad ciudadana” funciona como un nuevo rostro del viejo proyecto colonial. Se construye un enemigo interno para justificar la violencia estatal y privatizar los bienes comunes. Así, el neoliberalismo no solo gestiona la economía: gestiona los cuerpos y las vidas, definiendo quién merece existir y quién puede ser descartado.

Esta racionalidad produce un tipo específico de subjetividad: el sujeto-empresa, competitivo, individualista, emocionalmente anestesiado y racialmente inconsciente. Se le exige “resiliencia” mientras se le despoja de derechos; se le ofrece “inclusión” mientras se le niega ciudadanía plena. El racismo se vuelve así performativo: incluso quienes lo padecen terminan reproduciéndolo en su deseo de blanquearse simbólicamente, de acceder al consumo como forma de reconocimiento.





Žižek advierte que este es el triunfo perfecto de la ideología: cuando la dominación se vuelve deseo. Y es aquí donde el marxismo conserva toda su vigencia: en la necesidad de desenmascarar las formas contemporáneas del fetichismo. El racismo, como el dinero, es una ficción real: no tiene fundamento biológico, pero organiza materialmente la sociedad.

En la estructura social ecuatoriana, la persistencia de la desigualdad racial tiene un correlato económico preciso. Los pueblos indígenas y afroecuatorianos presentan los mayores índices de pobreza y exclusión educativa. Pero más allá de las cifras, lo decisivo es entender cómo el racismo naturaliza esas diferencias, impidiendo que se reconozcan como producto de relaciones de poder.

Las políticas neoliberales implementadas en las últimas décadas han intensificado estas brechas. El desmantelamiento del Estado social no afecta a todos por igual: recae sobre los cuerpos históricamente racializados. En ese sentido, el neoliberalismo no es una ruptura con la colonialidad, sino su reconfiguración.

La educación, por ejemplo, reproduce la jerarquía epistémica: los saberes ancestrales son folklorizados o marginados; el conocimiento válido sigue siendo el occidental. En el ámbito mediático, la representación de lo indígena o lo afro se asocia al atraso, la violencia o la marginalidad. Y en el terreno político, las élites utilizan la retórica del orden para criminalizar la protesta popular. Todo ello forma parte de una pedagogía del poder que enseña a las mayorías a aceptar su lugar subordinado.

Desmontar el racismo estructural implica, por tanto, ir más allá de la denuncia moral o jurídica. Supone cuestionar el modo de producción simbólica que lo sostiene. Como diría Echeverría, se trata de disputar el sentido civilizatorio mismo del capitalismo. El horizonte no puede ser una "inclusión" en los términos del mercado, sino una transformación radical de las condiciones que producen exclusión.

Desde una perspectiva marxista, la lucha contra el racismo no es un asunto "identitario" separado de la lucha de clases: es una dimensión esencial de la emancipación. El capital necesita de la racialización para fragmentar al trabajo y garantizar la acumulación. En consecuencia, la superación del racismo requiere una nueva forma de organización social en la que la vida —no la mercancía— sea el valor central.

La tarea crítica consiste en revelar la continuidad entre colonialidad y neoliberalismo, entre el mito del progreso y la producción de sujetos desechables. En tiempos en que el discurso tecnocrático pretende reducir la política a gestión y la cultura a entretenimiento, el pensamiento emancipador debe recuperar su filo filosófico: volver a nombrar lo que el poder oculta.

Ecuador no podrá pensarse fuera de su herida colonial mientras el neoliberalismo siga operando como su forma dominante de existencia. Pero allí donde la violencia se vuelve cotidiana, también germina la posibilidad de otra historia bajo una conducción política unitaria y de con perspectiva de clase. En los territorios comunitarios, en las luchas feministas, en las organizaciones indígenas, afro y populares, persiste una racionalidad distinta: aquella que entiende la vida como relación, no como propiedad.



Quizás la tarea del pensamiento crítico hoy sea atreverse a pensar lo imposible. Y lo imposible, en este contexto, no es otra cosa que la igualdad. No como promesa abstracta del mercado, sino como práctica concreta de dignidad y justicia.

Solo cuando el Ecuador se mire a sí mismo sin las máscaras del mestizaje ideológico, podrá iniciar una verdadera descolonización del poder y del deseo. Mientras tanto, el -racismo seguirá siendo la otra cara del neoliberalismo.